

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.) Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del BOLETÍN.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS DOMINGOS.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 7 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 8 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos. Se suscribe en esta capital, Imprenta de Jose M. Ramos. Colon, número 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G.) continúa en esta Corte sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan la Serrna. Sra. Princesa de Asturias, las Serrnas. Sras. Infantas Doña Maria del Pilar, Doña Maria de la Paz y Doña Maria Eulalia.

(Gaceta núm. 326)

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL DECRETO.

De acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en autorizar al de Hacienda para que presente á las Cortes un proyecto de ley autorizando la enajenacion de los bonos del Tesoro constituidos en garantía subsidiaria de las obligaciones creadas por la ley de 3 de Junio de 1876, y estableciendo las condiciones á que en adelante han de quedar sujetos aquellos valores.

Dado en Palacio á veintinueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Ministro de Hacienda, Manuel de Orovio.

A LAS CORTES.

La ley de 11 de Julio de

1877 autorizó al Gobierno para saldar el descubierto del Tesoro enajenando los bonos que constituyen su cartera, y emitiendo obligaciones con garantía de la renta de Aduanas por la suma nominal de 16 millones de pesetas. Solo en parte ha usado hasta hoy el Gobierno de esa doble autorizacion. Consagrado con celo incesante á mejorar la situacion del Tesoro público, no realizó hasta 11 de Febrero del año actual la negociacion de las obligaciones sobre la renta de Aduanas, y se abstuvo de enajenar los bonos en cartera, aplazando la conversion de la Deuda flotante, que no alcanzó á cubrir el producto de las obligaciones negociadas, con la firme esperanza de realizarla despues en mas ventajosas condiciones. La estimacion creciente de los bonos del Tesoro ha justificado en forma bien cumplida la previsora confianza á que obedeció aquel propósito; y mientras con tales resultados diferia el Ministro que suscribe la liquidacion total del descubierto, lograba conllevarle sin dificultad ni quebranto, reduciendo antes bien el interés de los préstamos del Banco de España, y limitando á ellos las operaciones de Tesoreria. A favor de tan positivas ventajas juzga el Gobierno de S. M. llegado el momento de saldar definitivamente todos los descubiertos que, procedentes

aun en su mayor parte del periodo anterior á 1.º de Julio de 1876, vienen elevando la cifra de la Deuda flotante del Tesoro. Con este objeto el Ministro que suscribe tiene la honra de presentar á las Cortes el adjunto proyecto de ley, destinado á poner término á la liquidacion de la guerra y de los presupuestos pasados, al propio tiempo que á enjugar el déficit que ofrezcan los dos ejercicios en curso.

Afortunadamente para lograrlo ha llegado á ser por las circunstancias antes expuestas, no ya suficiente, sino excesiva la autorizacion concedida al Gobierno por el art. 1.º de la ley de 11 de Julio de 1877, y por el 30 de la de presupuestos de 21 de Julio de 1878; y al renunciarla en parte, considera conveniente á los intereses públicos someter á las Cortes algunas medidas referentes á la situacion de los bonos del Tesoro.

A fin de que su negociacion ofrezca seguros y definitivos resultados, es sin duda ventajoso realizarla de una sola vez y por su totalidad, suprimiendo la amenaza de nuevas cantidades de bonos lanzadas al mercado periódicamente; y esto se logrará si se reduce á 250 millones de pesetas el importe nominal de los que se enajenen en uso de aquella autorizacion, cance-

lando los restantes á medida que se liberen de la pignoracion subsidiaria en que los constituyó la ley de 3 de Junio de 1876. Importando 341.624.000 pesetas los bonos del Tesoro que se hallan en cartera y en toda clase de garantías; el Gobierno se desprende de un recurso cuantioso, puesto que en el adjunto proyecto de ley pide á las Cortes la cancelacion de bonos por valor de 91.624.000 pesetas; pero le deciden á esta reforma, por una parte la utilidad de realizar desde luego de un modo completo la negociacion, y por otra la consideracion lisonjera de que el extraordinario aumento obtenido por esta clase de valores públicos permite alcanzar con menor suma resultados todavía mas grandes que los que hace año y medio se calculaban para el porvenir.

Solo en cambio de estas indudables ventajas se hace preciso retirar con algun aumento de celeridad una parte de la garantía subsidiaria concedida á las obligaciones del Tesoro y del Páncro Nacional de España, que es seguro no ha de influir en la universal estimacion que alcanzan.

Todavía se acrecentará la de los bonos si, como reclama la igualdad que debe existir entre valores semejantes, se suprime el impuesto de 10 por 100 que en

la actualidad grava sus intereses, y cuya conservacion no es defendible porque no puede serlo la de una contribucion que produce el resultado de disminuir en vez de aumentar los recursos del Tesoro. Al proponer su supresion por otra parte, no hace el Gobierno sino restituir á esos valores las condiciones con que fueron creados.

De mayor importancia, pero de necesidad inexcusable si ha de regularizarse la situacion de los bonos haciéndoles accesible el capital extranjero, y aun el nacional que no se emplea en la adquisicion de bienes del Estado, era el restablecimiento inmediato de su amortizacion fija y periódica en sorteos anuales. No reclamada por la observancia estricta de los decretos-leyes de su creacion, toda vez que en lugar de la suma de 346.528.500 pesetas que hubiera debido amortizarse de ambas emisiones hasta 30 de Junio último, resulta retirada de la circulacion por los sorteos que tuvieron lugar y la admision en pago de bienes desamortizados la cantidad de 410 millones 630.500, que excede á aquella en 64.102.000 pesetas; exigen la opinion y la costumbre del mercado que valores de esta índole tengan asegurada una amortizacion fija que pueda alcanzar por igual á todos los tenedores, sea cual fuere el lugar y la condicion en que se hallen. Mas era al propio tiempo preciso no hacer directa ni indirectamente novedad alguna en la aplicacion de los bonos del Tesoro al pago de bienes nacionales que produce una amortizacion continua, y tambien por esto de segura y constante influencia en el curso de esos valores, respondiendo además á derechos adquiridos por los compradores que habrá un legitimo interés en mantener, mientras por corta que sea exista alguna diferencia entre el precio corriente de los bonos y su valor nominal. A combinar esas dos formas de reembolso se dirigen las disposiciones del proyecto que estableciendo, mientras sea necesaria, la amortizacion por vigésimas partes ya fija y normal desde el año próximo, no deliene ni dificulta á pesar de ella la amortizacion llamada indirecta, única que hoy

existe, antes bien la acelera notablemente retirando bienes de la circulacion por la fuerte suma de 91.624.000 pesetas.

Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe, con la autorizacion de S. M. y el acuerdo del Consejo de Ministros, tiene la honra de presentar á las Cortes el adjunto proyecto de ley.

Madrid 21 de Noviembre de 1878.—El Ministro de Hacienda, El Marqués de Orovio.

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.º El Gobierno hará uso de la autorizacion que le está concedida por el art. 1.º de la ley de 11 de Julio de 1877 y por el 33 de la de presupuestos de 21 de Julio de 1878 con sujecion á las reglas siguientes:

1.º La enajenacion de los bonos del Tesoro que hoy se hallan en cartera, afectos á operaciones de la Denda flotante y en garantia subsidiaria de las Obligaciones del Tesoro y del Banco Nacional de España, se limitará á la suma nominal de 250 millones de pesetas.

2.º Los bonos restantes, después de deducir de los enumerados en la regla anterior los 500.000 que representan aquella cantidad, continuarán garantizando las Obligaciones del Tesoro y del Banco, y serán cancelados á medida que se liberen.

3.º El Gobierno podrá enajenar desde luego por suscripcion pública ó por negociacion con el Banco Nacional de España u otro establecimiento de crédito, ó con particulares en la forma que considere mas beneficiosa, la suma de 250 millones nominales en bonos del Tesoro fijada por la regla 1.º

Art. 2.º Quedan libres desde 1.º de Enero de 1879 los bonos del Tesoro de la primera y de la segunda serie del impuesto de 10 por 100 con que gravó sus intereses la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876.

Art. 3.º Los bonos en circulacion serán amortizados por vigésimas partes sin distincion de series en sorteos anuales, que darán principio en Diciembre de 1879. Continuarán además admitiéndose en pago de bienes vendi-

dos por el Estado con sujecion á los decretos de 22 de Enero de 1869 y 26 de Junio de 1874.

Concurrirán simultáneamente á extinguir los bonos circulantes ambas amortizaciones no imputándose en forma alguna á la primera, los admitidos en pago de bienes desamortizados sino cuando lleguen á obtener número en los sorteos anuales.

Art. 4.º El Banco Nacional de España seguirá encargado del pago de los intereses y amortizacion de los bonos del Tesoro, reteniendo las cantidades necesarias del producto de las contribuciones directas, con arreglo á lo que dispone la ley de 11 de Julio de 1877. El pago de los intereses y amortizacion de los bonos del Tesoro tendrá lugar en Madrid y en las capitales de provincia en que lo domicilien sus tenedores. Se hará además en Paris y en Londres en la forma que se concierte con el Banco de España.

El Gobierno celebrará con el Banco el convenio necesario para establecer el servicio á que este artículo se refiere.

Madrid 21 de Noviembre de 1878.—El Ministro de Hacienda, El Marqués de Orovio.

Gaceta número 251.

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito contencioso-administrativo que pende ante el Consejo de Estado en grado de apelacion entre D. Ramon Gonzalez Llanos, y en su nombre, como apelante, D. Alejandro Groizard, y la Administracion general, apelada, y en su representacion mi Fiscal, sobre revocacion ó subsistencia de la Real orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 15 de Junio de 1875, por la cual, confirmando un acuerdo de la Junta de Pensiones civiles, se declaró que el recurrente no tiene derecho al abono de servicios y al mayor

regulador que pretendia por los que presó con posterioridad á la fecha en que fué jubilado:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del cual aparece:

Que en 5 de Marzo de 1858 la Junta de Clases pasivas clasificó como Catedrático cesante del Instituto de segunda enseñanza de Oviedo á D. Ramon Gonzalez Llanos, reconociéndole 23 años, 7 meses y 16 dias de servicios en aquel cargo, y en el de Juez de primera instancia, de ascenso, para el que fué nombrado por primera vez en 21 de Marzo de 1855, declarándole con derecho á la mitad del sueldo del primero, con sujecion á lo dispuesto en el art. 18 de la ley de Presupuestos de 26 de Mayo de 1835, por no haber completado dos años en el disfrute de haber del último destino:

Que habiéndolos completado posteriormente, en virtud de otro acuerdo de la misma Junta de 2 de Julio de 1858 se reconoció á aquel interesado en igual situacion de cesante: 24 años, 4 meses y 16 dias de servicios, y derecho al haber anual de 8.000 reales, mitad del de 16.000 que se consideró como regulador:

Que en 15 de Octubre de 1869 D. Ramon Gonzalez Llanos, que entonces desempeñaba de nuevo una cátedra en el Instituto de Oviedo, solicitó su jubilacion fundado en el mal estado de su salud, que se justificó con el expediente oportuno, y que le fué concedida por el Ministerio de Fomento en Real orden de 21 de Febrero siguiente, clasificándole la Junta en tal concepto, y segun acuerdo de 30 de Marzo de 1860 con 35 años, 9 meses y 16 dias de servicios, y con derecho por ellos al haber de 12.800 rs., cuatro quintas partes del regulador de 16.000:

Que el mismo interesado en instancia de 7 de Marzo de 1874 acudió al Presidente de la Junta de Pensiones civiles, exponiendo que nombrado por decreto de 16 de Abril de 1869 Magistrado de la Audiencia de la Coruña desde el 24 de Mayo siguiente hasta el dia 2 de aquel mes, habia servido dicha plaza en la Audiencia mencionada y en la de Valencia, y disfrutado por mas de tres años el sueldo de 30.000 rs. y durante uno el de

31.000, asignado últimamente á tal plaza y categoría; y suplicó que llamando á la vista el primitivo expediente de clasificación y uniendo al mismo los documentos comprobantes que acompañaba se le clasificara con el aumento de los nuevos servicios prestados; adoptando como tipo regulador para el señalamiento del haber pasivo en la situación de jubilado en que se le había declarado por decreto del Gobierno de 25 de Febrero de 1874 el sueldo de los 31.000 rs., y la Junta, en 25 de Abril del mismo año, en juicio de revision, reprodujo la declaración de la suprimida de Clases pasivas de 30 de Marzo de 1860; teniendo en cuenta que los servicios prestados como Magistrado por el reclamante lo fueron con posterioridad á la publicación del decreto-ley de 22 de Octubre de 1868; por lo cual, y en observancia de lo que este preceptuó, no pueden ser estimados y tampoco el sueldo disfrutado en consideración á los mismos, no pudiendo hacerse extensivo al caso el acuerdo recaído en 10 de Mayo de 1873 en el expediente de D. Pedro Rodon; citado como análogo al de que se trata, porque el referido acuerdo hizo relacion tan solo á los Magistrados ó Jueces jubilados por edad contra su voluntad; y D. Ramon Gonzalez Llanos fué declarado en tal concepto en 21 de Febrero de 1860 por imposibilidad física siendo Catedrático del Instituto de Oviedo;

Y que interpuesto recurso de alzada por aquel del anterior acuerdo para ante el Ministerio de Hacienda, este centro expidió Real orden de 15 de Junio de 1875, por la cual, de conformidad con el parecer de la Asesoría general, se resolvió desestimar la alzada interpuesta y confirmar el acuerdo de la Junta de Pensiones civiles, declarando que D. Ramon Gonzalez Llanos no tiene derecho al abono de servicios ni al mayor regulador que pretende por razon de los que prestó con posterioridad á la jubilacion que le fué concedida por la enunciada Real orden de 21 de Febrero de 1860;

Vistas las actuaciones contenciosas ante el Consejo de Estado, de las que aparece:

Que notificada la resolución

anterior al interesado, en 2 de Abril de 1877, en representación de aquel interpuso recurso contencioso contra la misma ante el Ministerio de Hacienda en 22 de Mayo siguiente el Doctor don Alejandro Groizard, recurso que remitido al Consejo amplió en 5 de Octubre último con la súplica de que se revoque la Real orden impugnada, y que en su lugar se declare que D. Ramon Gonzalez Llanos tiene derecho á que se le reconozcan para los efectos de su clasificación los servicios prestados en la carrera judicial desde 24 de Mayo de 1869 hasta 2 de Marzo de 1874 en que fué jubilado, de conformidad á lo prescrito en el art. 239 de la ley provisional sobre organizacion del Poder judicial, y á que se regule su haber pasivo con arreglo al mayor sueldo que disfrutó en la misma época;

Y que emplazado mi Fiscal para que contestase al recurso, lo efectuó en 3 de Diciembre del corriente año pidiendo que se absuelva á la Administracion general, y la confirmacion de la Real orden impugnada;

Visto el Real decreto de 7 de Marzo de 1851 en su art. 2.º, que dice: «En las propuestas para plazas de Ministro de los Tribunales Supremo y superiores y de Jueces de primera instancia se observarán las reglas siguientes: primera, para tres de cada seis vacantes se preferirá en la Península é islas adyacentes á cesantes de la respectiva categoría que estén adornados de los requisitos correspondientes, y entre ellos á los que disfruten sueldo del Estado; segunda, los jubilados que deseen volver á la carrera y tengan la aptitud debida para servir se considerarán como cesantes para los efectos de la regla precedente, con tal que, á solicitud suya, reintegren al Tesoro por medio de un descuento gradual la diferencia entre el sueldo de cesantia y el que hubiesen percibido por jubilacion:»

Visto el art. 1.º del decreto-ley de 22 de Octubre de 1868, segun el cual «la jubilacion constituye la separacion definitiva del servicio activo. Todo funcionario que despues de jubilado hubiese vuelto al servicio activo en cualquiera de las carreras del Estado no tiene derecho á mejorar la

clasificación que se le haya practicado en aquel concepto, ya por razon de los nuevos servicios prestados, ya por el sueldo disfrutado en consideración á los mismos:»

Visto el art. 10 de la ley de Presupuestos de 28 de Febrero de 1873, en que se previene que hasta que se apruebe una ley general de Clases pasivas serán estrictamente cumplidas las disposiciones del decreto-ley de 22 de Octubre de 1868, á contar desde la fecha del mismo, pero sin que en ningun caso pueda tener en su aplicacion efecto retroactivo con respecto á derechos fundados en leyes anteriores:

Visto el art. 243 de la ley provisional sobre organizacion del Poder judicial de 15 de Setiembre de 1870, que preceptúa que los jubilados por inutilidad antes de cumplir los 60 años podrán ser rehabilitados y volver al servicio acreditando haber desaparecido la causa que hubiese motivado la jubilacion, y despues de oido el Consejo de Estado:

Considerando que el art. 2.º del Real decreto de 7 de Marzo de 1851 se limitó á declarar en aptitud á los funcionarios jubilados de la carrera judicial para que, lo mismo que los cesantes, pudieran ser colocados en puestos activos de dicha carrera en los turnos al efecto establecidos, reintegrando al Tesoro la diferencia entre el sueldo de cesantia y el percibido por jubilacion:

Considerando que esta disposicion no creó derecho alguno á favor de los que, como el recurrente, ningun destino de la carrera judicial habia desempeñado hasta la fecha en que se dictó, pues tuvo por único objeto determinar la manera de volver al servicio activo los Magistrados y Jueces entonces jubilados y no los que en lo sucesivo obtuvieren estos cargos y llegasen á encontrarse en aquella situacion:

Considerando que al ser nombrado D. Ramon Gonzalez Llanos Magistrado de la Audiencia de la Coruña y Valencia, regia el decreto-ley de 22 de Octubre de 1868, con arreglo al cual, si bien no se podia negarle en absoluto aptitud legal para desempeñar dichos cargos, es á la vez indudable que los servicios en

ellos prestados no le dan derecho á mejorar su clasificación por prevenirlo así terminantemente el art. 11 del expresado decreto, cuya estricta observancia, á contar desde su publicación, se ordenó por la ley de 28 de Febrero de 1873:

Considerando que la prevención que se hace en dicha ley de que en ningun caso tuviera en su aplicacion efecto retroactivo el decreto de 22 de Octubre en nada favorece las pretensiones de Gonzalez Llanos, porque ningun derecho tenia á que se le rehabilitara para el servicio activo; y si despues se le rehabilitó, debe entenderse que lo fué quedando sometido á las disposiciones vigentes al tiempo de otorgársele esta gracia;

Y considerando, por último, que el Magistrado D. Ramon Gonzalez Llanos no se halla comprendido en el texto literal ni en el espíritu del art. 243 de la ley orgánica del Poder judicial, que se refiere únicamente á los que con posterioridad á su promulgacion sean rehabilitados para volver al servicio en las condiciones y con los requisitos que el mismo artículo determina;

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesion á que asistieron don Pedro Nolasco Auriolles, Presidente; D. Tomás Retortillo, don José Garcia Barzanallana, don Miguel de los Santos Alvarez, D. Estéban Martinez, D. Juan Jimenez Cuenca, D. José Maria Bremon, D. Mariano Zacarias Cazorro, D. Fernando Vidal, don Francisco La Rocha, el Conde de Tejada de Valdosa, D. José Maria Ródenas y D. Antonio de Mena y Zorrilla,

Vengo en absolver á la Administracion general del recurso interpuesto, y en confirmar la Real orden de 15 de Junio de 1875, que ha sido impugnada.

Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.»

Publicacion.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la

Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique en forma á las partes, y se inserte en la Gaceta de que certifico.

Madrid 6 de Junio de 1878.—
Pedro de Madrazo.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.—Elecciones.

Se recuerda el cumplimiento del título 5.º de la ley electoral sancionada en 20 de Julio de 1877.

En el Boletín oficial de esta provincia correspondiente al 10 de Agosto del año último, número 20, se halla inserta la ley electoral para Diputados á Cortes de 20 de Julio del referido año de 1877.

El art. 48 de la citada ley, dispone que el día 1.º de Diciembre de cada año se publicarán por edictos en todos los Ayuntamientos de la seccion y se insertarán en el Boletín oficial los resultados de las anotaciones del registro durante el año con respecto á las tres clases de los fallecidos, los excluidos y los nuevamente declarados electores para ser inscritos.

Esta prescripción está en armonía con lo que determina el artículo 45.

Para que este Gobierno pueda insertar en el Boletín oficial los resultados de las anotaciones que se hayan verificado en el registro del Censo electoral, preciso es que inmediatamente remitan los Sres. Alcaldes las relaciones certificadas que respecto á las mismas han debido formar las Comisiones del Censo, y que autorizadas por ellas deben ser expuestas al público en 1.º de Diciembre.

Segun el art. 49 de la propia ley, la Comisión inspectora admitirá hasta el 10 del mismo mes de Diciembre las reclamaciones que puedan hacer los electores inscritos en las listas vigentes á los interesados en las anotaciones publicadas contra la exactitud de las mismas y las resolverá de plano en vista de sus antecedentes en la Secretaría, notificando en el acto sus resoluciones á los reclamantes.

Estos podrán recurrir en queja de las decisiones de la Comisión al Gobernador de la provincia, cuyo recurso presentarán ante la misma Comisión, quien los remitirá inmediatamente con el expediente.

Respecto á las demás reglas que se establecen en el art. 51, los Ayuntamientos y Comisiones permanentes de inspección del Censo, cuidarán de su estricta observancia bajo su mas estrecha responsabilidad, de tal suerte que en 1.º de Enero próximo ha de anunciarse por edictos en todos los Ayuntamientos de la Sección la lista rectificada con las modificaciones á que hubieren dado lugar las reclamaciones propuestas, cuidando de remitir con toda urgencia á este Gobierno un ejemplar de la lista así rectificada, autorizada por todos los individuos de la Comisión inspectora y del Secretario para los fines que dispone el citado artículo.

Segun el art. 53, la lista electoral así rectificada será definitiva y regirá hasta la nueva rectificación anual.

Recomiendo á todos los funcionarios llamados á intervenir en tan importante servicio, observen la mayor imparcialidad y procedan con la mas recta justificación.

Orense Noviembre 25 de 1878.

El Gobernador,

BARTOLOMÉ MOLINA.

TERCERA SECCION.

GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Dispuesto por Real orden de 23 del actual la concentración en esta capital para el día 8 del mes de Diciembre próximo de todos los individuos que se hallan en esta destinados á Ultramar tanto los sorteados como los sustitutos, así como tambien los que en igual concepto de destino á Ultramar pertenecientes á otras provincias. Los Sres. Alcaldes dispondrán la marcha de todos los que haya en sus respectivos municipios abonándoles 50 céntimos de peseta diarios por razón de tránsito cuya cantidad previa relación de cargo será abonada en el acto en este Gobierno militar.

Los citados individuos destinados á Ultramar en los diferentes conceptos expresados anteriormente que el día 8 de Diciembre próximo no se hallen en el Cuartel de San Francisco de esta plaza para pasar la revista de Comisario presente serán juzgados como desertores con arreglo al art. 9.º del Reglamento que se halla copiado al respaldo del pase que se les expidió y deben tener en su poder.

Orense 26 de Noviembre de 1878.—El Brigadier Gobernador, Ramon Erenas.

CUARTA SECCION.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

El Martes 3 de Diciembre, se abre el pago de la mensualidad de Octubre del corriente año á las Clases pasivas, que perciben sus haberes por la Caja de esta Administración y Subalternas de estancadas de esta provincia.

Lo que se anuncia por medio del Boletín oficial para que llegue á conocimiento de los interesados.

Orense 26 de Noviembre de 1878.—El Jefe económico, Angel Guerra.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Gomesende.

Por término de seis dias á contar desde el de la inserción de este anuncio en los Boletines oficiales de la provincia, estará expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el repartimiento de la contribución de consumos y sal, que ha de regir en el corriente año económico, durante cuyo término se admitirán las reclamaciones que se presenten, las que serán resueltas con arreglo á Instrucción.

Gomesende Noviembre 24 de 1878.—El Teniente Alcalde, Manuel Seoane.

ANUNCIOS.

INTERESANTE.

Venta á plazos semanales,

mensuales y como mejor convenga.

En Orense.—Calle de Viriato, números 1 y 2, platería de Sampayo y Nóvoa, hay relojes de sobremesa despertador desde 40 á 50 reales uno; los hay de plata desde 130 reales uno. De oro para señora y caballero un gran surtido de última novedad de las mas acreditadas fabricas de Suiza.

En el mismo establecimiento se halla tambien un gran surtido de leontinas de doble y plata desde dos reales hasta 200, y en oro desde 600 hasta 2.000.

Se toma á cambio plata, oro y piedras finas por todo su valor, y se cambian relojes.

Tambien se componen á precios arreglados y se garantizan todos los objetos incluso las composturas siempre que lleguen á 20 reales.

YANO SE COSE Á MANO "SINGER"

garantiza sus legítimas máquinas para coser.

A propuesta de los representantes de

LA COMPAÑIA FABRIL

"SINGER"

varios Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Juntas de Instrucción pública, han autorizado á las profesoras de los colegios de niñas á su cargo para incluir en el presupuesto de material el importe de una máquina para coser. Tan respetables corporaciones han tomado en cuenta el beneficio que reportará la instrucción de las jóvenes en el manejo de tan necesario aparato, puesto que dentro de poco tiempo podrá contarse con un gran número de ellas dispuestas para presentar en el mercado los artículos de confección en las múltiples formas de este ramo, reemplazando al penoso trabajo manual con el fácil y perfecto de la máquina.

Las máquinas de

LA COMPAÑIA FABRIL

"SINGER"

han sido adoptadas para los trabajos oficiales, como construcción de uniformes, etc., por los gobiernos de Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y otros países.

VÉNDENSE Á PLAZOS

desde 10 REALES semanales.

sin entrada ni aumento alguno en los precios.

10 POR 100 AL CONTADO.

Máquinas para familia é industriales y para toda clase de costura.

Pídanse Catálogos ilustrados, con listas de precios y las condiciones de venta á plazos, en el

Depósito de esta provincia

ORENSE, PAZ, 30, ORENSE.

ORENSE: IMP. DE J. N. RAMOS.